CUENTA PUBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO**IV REGION DE COQUIMBO.****FISCAL REGIONAL DON ENRIQUE ALFONSO LABARCA CORTES****(ART. 36 DE LA LEY 19.640)**

Distinguidos invitados:

En mi calidad de Fiscal Regional de la IV Región de Coquimbo y, en cumplimiento a lo establecido en nuestra Ley Orgánica Constitucional, procedo a rendir ante la comunidad de la región de Coquimbo, la Cuenta Pública del período comprendido entre el uno de enero y el 31 de diciembre de 2010.

En la cuenta pública correspondiente al año 2009, nos referimos a los desafíos plasmados en el Plan Estratégico de la Fiscalía de Chile, que servirá de eje orientador del quehacer institucional para Fiscales y Funcionarios de la Fiscalía de Chile, proyectándose hasta el año 2015.

En base a esta planificación de largo plazo, la Fiscalía de Chile aspira en su visión a ser una Institución de excelencia, confiable, reconocida por la eficacia y eficiencia con que ejerce la persecución penal pública y la atención a víctimas y testigos, respetuosa de los derechos de todas las personas y formada por un equipo humano comprometido con el quehacer institucional.

En el mismo sentido, la Fiscalía de Chile Público debe cumplir su misión de dirigir en forma exclusiva las investigaciones criminales, ejercer cuando resulte procedente la acción penal pública instando por resolver adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos; todo ello a fin de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, con altos estándares de calidad.

El cumplimiento de esta visión y misión debe enmarcarse en valores claramente definidos: Probidad, Transparencia, Excelencia en la persecución penal, Excelencia en la atención, Respeto, Discreción, Creatividad y trabajo en equipo.

De esta forma, el año 2010 estuvo fuertemente marcado por el avance en la implementación y ejecución de los objetivos y proyectos estratégicos, enmarcados en los cuatro lineamientos institucionales:

1. El desarrollo de una persecución penal eficiente con estándares de calidad;
2. El mejoramiento continuo de la gestión administrativa;
3. El potenciamiento de la atención y protección a víctimas y testigos; y
4. El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

Esta base conceptual, que estamos día a día llevando a la práctica con proyectos y programas concretos, ha permitido a esta Región reposicionar fuertemente sus resultados cuantitativos y cualitativos a nivel nacional, a tal punto que podemos señalar con orgullo que, durante el año 2010, todas nuestras fiscalías locales cumplieron en un 100% las metas institucionales, lo que nos ubica en un primer lugar a nivel nacional, resultados que en esta cuenta pública corresponde detallar a la comunidad, lo que se hará en función del avance en el cumplimiento de los lineamientos estratégicos institucionales.

Primer Lineamiento Estratégico: Mejoramiento Continuo de la Gestión Administrativa.

La Fiscalía reconoce como pilar fundamental al capital humano que da soporte a uno de sus lineamientos estratégicos: el mejoramiento continuo de la gestión administrativa. El cumplimiento de este lineamiento se ha visto reflejado en los constantes progresos en cada una de las áreas fundamentales que la misión de la Fiscalía de Chile comprende: la dirección exclusiva de las investigaciones con el ejercicio de la acción penal pública en los casos en que corresponda, y la atención y protección de víctimas y testigos.

Durante el periodo se lograron importantes resultados, entre otros, en los ámbitos de gestión de causas, atención de usuarios e información, desarrollo institucional y administración de evidencias y especies, que permitieron a la región reposicionarla al nivel de liderazgo nacional que le corresponde desde el inicio de la Reforma Procesal Penal.

Este mejoramiento de la gestión a nivel regional estuvo marcado por la estandarización y consolidación de procesos de trabajo en distintas áreas y unidades: fiscalías locales y equipos de tramitación de casos menos complejos y las áreas de recursos humanos, de administración y finanzas y de control y desarrollo de la gestión, de asesoría jurídica y especialmente en la atención y protección a víctimas y testigos, todas éstas con un soporte tecnológico de última generación que permite tomar decisiones oportunas y en tiempo real.

Asimismo, el año 2010 estuvo marcado fuertemente por las tareas y actividades derivadas de los Compromisos de Gestión Institucional (CGI) que cada año se definen en conjunto con el Ministerio de Hacienda, en tres áreas prioritarias:

a.- Recursos Humanos y sus subsistemas enmarcados en el modelo de Gestión por Competencias.

b.- Usuarios y Comunidad con sus dos subsistemas: Sistema Integral de Atención a Usuarios y Sistema de Información para la Comunidad Utilizando TIC; y

c.- Gestión Organizacional y su Sistema de Control de Gestión.

Estas tres áreas dicen relación con los sistemas transversales o de apoyo a la consolidación definitiva de la Institución y representan sus principales desafíos como complementos necesarios para ejercer la acción penal pública y proteger a las víctimas y a los testigos de los delitos, incorporando en forma transversal los objetivos y líneas estratégicas ya definidas.

En este contexto, queda reflejado que el mejoramiento de la gestión de la Fiscalía de Chile tiene, en su base, una potente política de recursos humanos que, como se explicitó, entiende que el capital humano es nuestro principal activo.

La definición nacional para el desarrollo de esta política de recursos humanos, ha correspondido al modelo de Gestión por Competencias, el cual tiene como objetivo atraer, desarrollar y mantener a las personas mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de Recursos Humanos, en base a las competencias, perfiles y resultados requeridos para un desempeño de excelencia.

Este modelo comprende los subsistemas de Reclutamiento y Selección, Capacitación y Desarrollo, Promoción y Desarrollo y Evaluación del Desempeño.

El subsistema de Reclutamiento y Selección nos permite incorporar el capital humano con las competencias y perfiles necesarios para facilitar el logro de los estándares de calidad y eficiencia definidos por la institución, utilizando al efecto procesos y procedimientos estandarizados, de modo de desarrollar un modelo común y compartido a nivel nacional teniendo presente los perfiles definidos para cada uno de los cargos que integran y constituyen la Fiscalía de Chile.

Dentro de este subsistema, durante el año 2010 se realizaron 20 concursos públicos, que comprendieron cinco concursos en el estamento de fiscales, nueve en el de profesionales, tres en técnicos, uno en el administrativo y dos en el estamento de auxiliares, lo que ha permitido reclutar más de 2.600 postulantes, seleccionando 20 de ellos que cumplen con los requisitos establecidos en los concursos y que se ajustan a las competencias y perfiles del cargo requeridos considerando el saber, el saber hacer y el saber ser con la finalidad de aumentar los rendimientos y, en consecuencia, mejorar el desempeño.

Adicionalmente, este sistema ha sido complementado regionalmente, respecto de todos los miembros que se integran a la institución, con un completo proceso de inducción a nivel regional y local, en base al cual el funcionario o fiscal que se incorpora, pueda conocer la visión, misión y valores de la Fiscalía de Chile, junto con los lineamientos y objetivos estratégicos y las principales líneas de acción. Asimismo, debe conocer la gestión administrativa y jurídica, los planes y metas de la institución y su orgánica interna, de tal forma que pueda comenzar a cumplir sus funciones de la manera más adecuada posible.

El segundo subsistema corresponde a Capacitación y Desarrollo, el que permite contar con un sistema de formación, nivelación y perfeccionamiento centralizado y único para la Fiscalía de Chile, orientado a desarrollar las competencias de las personas para mejorar su desempeño en la institución. En el diseño de este subsistema, nuestra región ha tenido una importante participación como integrante de una comisión conformada especialmente para estos efectos.

En esta área, la Fiscalía de Chile completó el levantamiento de los treinta y ocho perfiles de cargo de todos los puestos de trabajo definidos al interior de la organización. A cada uno de los integrantes de estos cargos se le midieron las brechas de competencia con la finalidad de determinar las necesidades de capacitación, mediante un moderno procedimiento informático en línea que permitió obtener como producto final, un informe individual y un informe por cargo asociado a la brecha por cada competencia del perfil correspondiente. Esto nos ha servido para elaborar un diseño y un plan para abordar las brechas detectadas, de modo tal de atenuarlas o eliminarlas dentro del proceso formativo y de desarrollo de carrera de fiscales y funcionarios. Lo anterior, permitirá nivelar todos los cargos a nivel nacional, de manera de contar no solo con un sistema integrado y homologado, sino también elevar hacia límites superiores los desempeños de Fiscales y funcionarios, a través de una malla de formación institucional.

También es relevante mencionar que el año 2010 los funcionarios y fiscales que estaban contratados en los cargos claves de Fiscales Jefes, Fiscales Adjuntos, Abogados Asistentes y Administradores, asistieron a cursos de capacitación a nivel nacional, especialmente diseñados en el contexto de la gestión por competencias y que fueron impartidos por relatores internos conforme a un estricto Plan y Programa formativo, para el cual fue necesario un proceso previo de elaboración de mallas curriculares, con la definición de sus respectivos módulos de evaluación de la capacitación, con indicadores de gestión, encuestas de satisfacción y evaluación de aprendizaje. En este marco, se impartieron a nivel nacional los cursos de gestión por competencias; control de gestión de calidad; técnicas de destrezas de litigación oral inicial y avanzada; liderazgo de equipos de trabajo de excelencia; y gestión de recursos físicos y financieros de los funcionarios de la Fiscalía de Chile.

Estas capacitaciones fueron dictadas por relatores internos quienes, a través de un proceso nacional masivo de reclutamiento, fueron seleccionados para dictar estos cursos. Una vez seleccionados los relatores, éstos contaron con una formación previa dictada por una consultora experta, lo que permitió el conocimiento necesario para diseñar los módulos, los descriptores, los perfiles asociados y los contenidos de los programas y actividades de capacitación. Cabe destacar que a nuestra región no sólo le correspondió enviar asistentes a estas capacitaciones, sino también el reconocimiento de parte del Fiscal Nacional de seleccionar como relatores internos, al Director Ejecutivo Regional, don Adio González Cortés y al Administrador de la Fiscalía Local de Coquimbo, don Pablo Vilches Lizama, quienes a través de clases expositivas, impartieron cursos de control de gestión de calidad y gestión de

recursos físicos y financieros respectivamente, lo que permitió transmitir conocimientos, habilidades y experiencias a otros miembros de la institución, con una alta evaluación de su participación.

Adicionalmente, se desarrollaron otras capacitaciones impartidas a nivel nacional referidas a Derechos Humanos, Crimen Organizado y Terrorismo, Responsabilidad Penal Adolescente, Delitos de alta complejidad, Violencia Intrafamiliar y Derechos de Discapacitados, entre otras.

En estas capacitaciones nacionales, participaron 28 fiscales y funcionarios de nuestra región.

Respecto de las capacitaciones de orden internacional que promueve la Fiscalía de Chile, destacamos que la región de Coquimbo fue recomendada por el propio Fiscal Nacional para que participase de un Programa denominado ILEA, en El Salvador. Para participar de esta academia internacional fue elegido como representante de Chile, nuestro Director Ejecutivo Regional, quien permaneció durante 6 semanas en dicha actividad la que contó con expositores e instructores de la DEA, FBI, ATF, Servicio Secreto y Policía de Nueva York, entre otros.

En la misma línea de capacitación y, como se realiza anualmente, en nuestra región se diseñó y ejecutó un Plan Regional Anual, proceso mediante el cual Fiscales y Funcionarios adquirieron, actualizaron y desarrollaron competencias para un más eficiente desempeño en sus funciones. Las actividades de capacitación se abordaron conforme a cuatro grandes líneas:

- área jurídica;
- gestión, liderazgo y mejora continua;
- conocimientos de informática; y
- mejoramiento de clima organizacional.

La ejecución de este Plan Regional Anual de Capacitación derivó en la realización durante el año 2010, de 16 diferentes cursos, actividades que fueron dictadas por destacados académicos especialistas en delitos económicos, liderazgo, calidad y trabajo en equipo, derecho constitucional y delitos tributarios, entre otros. Adicionalmente, un importante grupo de actividades de este plan de capacitación fue asumida por Directivos y Funcionarios de la propia Fiscalía Regional de Coquimbo, quienes expusieron temáticas relacionadas con profundización en materias de derecho penal, violencia intrafamiliar, delitos de ley de drogas, estrategias en la planificación y ejecución de las investigaciones, herramientas integradas de gestión, control de gestión, y uso de aplicaciones informáticas relevantes para la gestión, entre otros.

Este Plan Regional Anual consideró e integró a todos los estamentos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, registrando 312 asistentes y 65 horas de capacitación, con un presupuesto ejecutado de \$6.375.080.

El tercer subsistema del modelo de gestión por competencias corresponde a Promoción y Desarrollo, el cual permite contar con un sistema de formación, nivelación y perfeccionamiento centralizado, único para la Fiscalía de Chile, orientado a desarrollar las competencias de las personas para mejorar su desempeño en la institución.

En este marco, se han realizado importantes esfuerzos para generar de manera interna, procesos de ascenso, promoción, movilidad y desarrollo de funcionarios, desde una perspectiva enfocada en las capacidades técnicas, experiencia, actitudes, participación, compromiso y, especialmente, competencias.

En este sentido, durante el año 2010 se concretaron, en los distintos estamentos y en base a parámetros objetivos, un total de 14 ascensos y se generaron 9 promociones.

En el marco del cuarto subsistema, de Evaluación del Desempeño, la Fiscalía de Chile espera contar con un sistema de medición del desempeño, transparente y objetivo, basado en el modelo de gestión por competencias, que permita alinear las conductas de las personas con los objetivos organizacionales, valorando el ámbito de resultados en el contexto de la mejora continua y valoración de la excelencia y la calidad, las condiciones personales, la iniciativa, las destrezas técnicas, las relaciones interpersonales y el cumplimiento de normas, entre otros.

En este subsistema se ha establecido un mecanismo que permite evaluar a las personas en instancias personalizadas que apuntan a la retroalimentación permanente, a la comunicación y al establecimiento de metas y de compromisos personales de mejora en el marco de los distintos equipos de trabajo formados en las fiscalías locales y regional.

En este contexto, el año 2010 se entregaron los resultados de la segunda encuesta nacional de clima organizacional, aplicada a fines del 2009 que demuestra una mejora constante a nivel regional y por sobre el promedio nacional en todos los atributos medidos, tanto aquellos dirigidos a aspectos administrativos, ambientales como psicosociales, y que por cierto impactan positivamente en la eficiencia y eficacia de nuestra organización. Esto ha permitido implementar paulatinamente la filosofía del buen trato y del cumplimiento de los resultados bajo el alero de un buen clima laboral interno.

Como parte de todas estas actividades tendientes a contar con un equipo humano de excelencia, se ha diseñado e implementado una política de integración en instancias de resolución y participación en proyectos de relevancia institucional, entre los cuales cabe destacar el Comité Ejecutivo Regional, compuesto por las más altas jefaturas de la región, el Comité Operativo Regional, constituido por personas ajenas a la toma de decisiones pero cercanas y representativas de los equipos locales y regional cuyo objetivo es fortalecer las comunicaciones internas y contribuir con iniciativas para mejorar la gestión e integrar al personal; el Consejo de Fiscales Jefes y Administradores, donde participan e interactúan activamente el Fiscal Regional y su equipo Directivo, y el Comité de Gestión de Calidad representado por directivos, fiscales y profesionales con amplios conocimientos en planes y programas de mejoramiento continuo, entre otras instancias de participación, integración y compromiso del recurso humano.

Por último, en el área del capital humano es necesario recalcar que, por sexto año consecutivo, la región de Coquimbo fue elegida para la aplicación de exámenes para detectar eventuales consumos de drogas, cuyos resultados fueron muy satisfactorios ya que arrojaron nuevamente un 100% de negatividad.

En otro ámbito del mejoramiento de la Gestión, durante el año 2010, a la Región le correspondió participar activamente en el diseño de un Sistema de Control de Gestión que monitorea el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y apoya la toma de decisiones de ámbito jurídico y de gestión administrativa, respecto de los resultados asociados a los procesos críticos de la institución.

En este sentido, se trabajó en la definición de aquellos indicadores estratégicos que entreguen información cuantitativa y cualitativa relativa al nivel obtenido en la entrega de los servicios que la institución brinda a sus usuarios y a la comunidad.

En base a los indicadores y metas actuales, como se señaló, nuestra región obtuvo un 100% de cumplimiento a nivel de todas sus fiscalías locales. Para lograr estos resultados contamos con el gran aporte que el equipo humano regional entrega y con actividades destinadas a la consolidación de los procesos de trabajo, tanto de las Unidades de la Fiscalía Regional de Coquimbo como de las Fiscalías Locales, especialmente mediante la definición de procesos de trabajo que comprenden las principales funciones operativas y estratégicas que les corresponden a cada uno de los Centros de Responsabilidad definidos en la institución.

En esta misma línea de mejoramiento de los procesos de trabajo, una gran importancia reviste la consolidación del modelo de Tramitación de Casos Menos Complejos en nuestras fiscalías locales, el cual se caracteriza por la utilización preferente de los recursos administrativos, el empleo de equipos estandarizados y de actividades susceptibles de tramitación masiva, todo lo cual permite liberar recursos para aquellas investigaciones que presentan mayor connotación y complejidad, obteniendo como producto final términos de mayor calidad.

En este mismo marco de optimización en el uso de los recursos con que cuenta la Fiscalía Regional, en el año 2010 y gracias a un Auto Acordado del mes de Marzo del mismo año de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, se conformó la Unidad de Corte que permite, con un equipo especializado de abogados, tramitar ante dicho tribunal las causas en las cuales se hubieren

interpuesto recursos procesales en alguna de las investigaciones penales dirigidas por los Fiscales Adjuntos de la región. Esta instancia ha permitido centralizar toda la información sobre recursos jurisdiccionales interpuestos por la Fiscalía de Chile y los demás intervinientes, realizar un seguimiento exhaustivo de las causas desde su ingreso a la I. Corte de Apelaciones, mantener actualizada una base de jurisprudencia regional y nacional, contar con una estadística acabada acerca del resultado de los recursos procesales y juicios orales y, en definitiva, hacer mucho más eficiente la tramitación de los recursos procesales.

Desde su creación, la Unidad de Corte ha participado en 304 alegatos, que corresponden a 208 recursos de nulidad y 96 recursos de apelación, interpuestos por los distintos intervinientes del proceso penal. Entre los recursos de apelación tramitados, cabe resaltar 52 casos en los cuales se confirmó la prisión preventiva solicitada por los Fiscales o se decretó una prisión preventiva que había sido negada en primera instancia.

En otra área prioritaria dentro de la mejora continua de la gestión administrativa, la región ha mantenido su preocupación por incorporar, desarrollar y mejorar herramientas tecnológicas que le permitan cada vez hacer más eficiente y eficaz la gestión de las fiscalías locales y tener un control acorde con las metas nacionales, regionales y locales.

Es así como el año 2010 se desarrolló e implementó regionalmente una herramienta de apoyo para la comunicación a las víctimas de todas las sentencias definitivas que se hubieren dictado en los Juzgados de Garantía y Orales de la región en los procedimientos dirigidos por las fiscalías locales, permitiendo facilitar la comunicación tanto a víctimas personas naturales como jurídicas, mediante comunicación escrita, telefónica o por correo electrónico.

Adicionalmente, atendida la importante cantidad de actividades que todos los Compromisos de Gestión Institucional conllevan, se implementó una herramienta de seguimiento de proyectos, que permite contar con un exhaustivo control del avance en el cumplimiento de cada uno de los centros de responsabilidad regional en las distintas etapas e hitos que comprenden. Cabe destacar que la región cumplió las actividades planificadas para el año 2010, en cada uno de los Compromisos de Gestión Institucional, en un 100%.

Por otra parte, durante el periodo se reemplazaron, en el contexto del Proyecto Nacional SEUS, la cantidad de 106 equipos computacionales, permitiendo de esta forma renovar gran parte del equipamiento informático; con ello, los funcionarios de la región cuentan con modernos equipos para cumplir en forma más adecuada sus funciones de investigación penal y de atención a víctimas y testigos. Asimismo, se concretó la adquisición de 4 cámaras de videoconferencias que permiten facilitar el acceso de víctimas, testigos y peritos a audiencias de juicios orales, disminuyendo en forma importante los costos y tiempos de traslado involucrados.

Dentro de la gestión de la Fiscalía de Chile en la región, el mantenimiento de un gasto equilibrado, transparente y austero de los recursos presupuestarios constituye permanentemente uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de sus funciones, realizando un constante seguimiento a cada uno de los centros de costos y su comportamiento financiero.

Durante el año 2010 se contó con un presupuesto anual de 4.294 millones de pesos, el cual se ejecutó en un 99,6%, cifra que refleja nuevamente el alto nivel de eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, consecuencia de una rigurosa planificación, organización, control y ejecución gradual durante el periodo de los recursos dispuestos para el financiamiento de nuestras operaciones, conforme los lineamientos institucionales.

En lo que refiere a la ejecución presupuestaria de inversión en infraestructura destaca, en el mes de Agosto de 2010, la inauguración del inmueble de la Fiscalía Local de Vicuña, que cuenta con una superficie construida de 280 metros cuadrados y un costo total de construcción y de equipamiento de \$232.598.000.

Otro ítem importante en infraestructura corresponde a las mantenciones y mejoras periódicas que se deben realizar a nuestros inmuebles institucionales, para lograr un mejoramiento continuo en los espacios de atención a usuarios y en las dependencias donde se desarrollan las funciones de nuestro equipo regional. Es así como durante el año 2010 el presupuesto ejecutado en mantenciones y reparaciones alcanzó la suma \$60.971.000, principalmente en reposición de cielo modular de la Fiscalía de Coquimbo, habilitación de salas de recepción y atención de Fiscalía de Illapel, extensión de líneas ISDN en Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena, implementación de elementos de seguridad en distintas fiscalías locales y otras obras que permiten mantener en perfecto estado de conservación las dependencias de nuestras fiscalías.

Todos los procesos regionales mencionados nuevamente han estado sujetos a auditorías internas nacionales y regionales que demuestran que nuestra región mantiene un estricto apego a la normativa legal y reglamentaria; es así como en el periodo

se auditaron las áreas de finanzas, recursos humanos, seguridad informática, custodia de especies y de dineros incautados, ejecución del Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos, entre otros, obteniéndose en todos ellos altos estándares de cumplimiento de la normativa reglamentaria y legal.

Segundo Lineamiento Estratégico: El potenciamiento de la atención y protección a víctimas y testigos.

El segundo lineamiento estratégico refiere a la necesidad de potenciar la atención y protección a víctimas y testigos, lo que ha constituido preocupación permanente de esta Fiscalía Regional de Coquimbo, entendiéndose que comprende a todos los integrantes de nuestro equipo, tanto Fiscales como Funcionarios.

En este contexto, ya en la cuenta pública anterior, nos referimos a que nuestra región fue pionera, a nivel nacional, al dar inicio a la puesta en marcha a un nuevo modelo de atención de víctimas y testigos, con una atención mucho más específica, estandarizada, de amplia cobertura e implementado de manera transversal, conocido como el Proyecto OPA, que define las actividades de Orientación, Protección y Apoyo que debemos entregar a las víctimas y testigos que son atendidas en nuestras fiscalías.

Dentro de los cambios requeridos para la adecuada aplicación del Proyecto OPA y la ampliación en su cobertura, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha debido permanentemente mejorar nuestros procesos de trabajo, aprovechando al máximo los recursos humanos y tecnológicos, incorporando mejores prácticas e innovando en nuevas posibilidades para hacer más eficientes su rol de ejecutor de prestaciones a víctimas y testigos y de asesor de los operadores locales para la entrega óptima de nuestros servicios.

Dentro de los servicios que la Fiscalía entrega, existe un procedimiento especializado y diferenciado según las características y necesidades de protección específicas de cada usuario, que incluyen siempre los servicios de Orientación,

Protección y Apoyo, sobre los cuales procedo a describir sus resultados.

En este contexto de una atención especializada, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha logrado elevar en casi seis veces el número de usuarios atendidos, desde aproximadamente la cantidad de 1.300 en el año 2008 antes de la implementación del proyecto, a más de 7.600 durante el año 2010, en pleno régimen de funcionamiento de este proyecto estratégico.

En una primera línea de acción se encuentra la intervención en Delitos Violentos, modelo de intervención que plantea una evaluación de riesgo de todas las víctimas y testigos de delitos graves tales como delitos sexuales, robos violentos, amenazas, homicidios y otros, pauta que es aplicada por un funcionario en cada Fiscalía Local al momento de la declaración de la víctima o testigo y cuyos resultados se encuentran definidos en base a parámetros objetivos. En función del resultado de esta actividad, se implementan las medidas de protección que correspondan de acuerdo al nivel de riesgo, pudiendo profundizarse esta intervención en aquellos casos en que el riesgo evaluado sea mayor.

Entre las medidas de protección más frecuentes que adopta la Fiscalía de Chile para sus usuarios, se encuentran las rondas periódicas de Carabineros en el domicilio; la entrega de información sobre teléfono de comisaría o de Plan Cuadrante; el contacto telefónico prioritario con la policía; y la comunicación directa con el servicio de emergencia Familia en Línea, que permite una rápida y expedita comunicación con Carabineros en caso de una situación grave que este viviendo el usuario.

Los esfuerzos en esta área han permitido disminuir considerablemente las situaciones de riesgo a que se pudieren ver expuestos víctimas y testigos. Dentro de estos resultados,

destaca la reducción en casi un 50% en el temor de las víctimas y testigos, gracias a su asistencia a la fiscalía y a las medidas de protección adoptadas, índice obtenido a través de una encuesta realizada a nivel nacional por una empresa experta en el área.

La segunda línea de acción está dirigida a la atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar, para las cuales, por su gran vulnerabilidad, se realiza una evaluación de riesgo a través de una pauta de evaluación específica, dentro de las primeras 24 horas de ingresado el caso a la Fiscalía.

En este ámbito, durante el año 2010 se evaluó el riesgo de más de 2.700 víctimas de Violencia Intrafamiliar, a las cuales se otorga, dependiendo del riesgo detectado, prestaciones destinadas a reducir su situación inseguridad y se aplican las medidas de protección adecuadas, entre las cuales se encuentran el reforzamiento de las condiciones de seguridad de los domicilios particulares; derivaciones a la Casa de Acogida del SERNAM; traslados protegidos de víctimas y testigos desde su lugar de trabajo o estudio a su hogar o lugar donde deban realizar diligencias; relocalizaciones, pago de arrendamiento y sustento por un período determinado, y la incorporación al sistema de Call Center de Familia en Línea.

La tercera línea de acción corresponde a las víctimas menores de edad de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, para lo cual se tiene en especial consideración la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, razón por la cual durante el mes de Septiembre de 2010 se implementó en la región un modelo nacional de intervención especializada para estos casos.

Este modelo plantea la ejecución de un contacto con la víctima dentro de las primeras 48 horas desde el ingreso del caso a la fiscalía, con el adulto responsable del menor de edad, con la finalidad de recopilar antecedentes iniciales para evaluar en forma inmediata la situación de riesgo de la niña, niño o adolescente e implementar las medidas de protección que se requieran. Considera además una entrevista personal especializada por parte de nuestros profesionales, con el objetivo de profundizar la evaluación de riesgo, diseñar e implementar medidas de protección complementarias si se requieran, evaluar la necesidad de intervención reparatoria en estos menores, la entrega de orientación psicosocial y penal, y la definición de la necesidad de apoyo del fondo de aportes económicos.

La cantidad de menores víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales atendidos desde la implementación de este proyecto, alcanza los 651.

La cuarta línea de acción está dirigida a la atención de las víctimas mayores de edad de delitos sexuales, que tiene por objetivo brindar una primera acogida a estas víctimas, evaluar un eventual riesgo, proporcionar orientación legal y psicosocial y derivar a la red asistencial para reparación, cuando sea procedente. En el periodo, se brindó esta atención especializada a 147 víctimas de delitos sexuales.

Especial relevancia tiene en este ámbito de acción el que la Fiscalía Regional de Coquimbo, durante el año 2010, se abocó a diseñar un proyecto de delitos sexuales cuyo objetivo general es establecer un sistema uniforme de actuación en la región en las investigaciones por este tipo de delitos, que implique un apoyo efectivo a los fiscales en su labor y propenda a disminuir los efectos adversos que significa para las víctimas participar en el proceso penal.

Este proyecto pretende, a través de una entrevista única en Cámara Gessell realizada por un equipo especializado conformado por fiscales en conjunto con las Policías y con profesionales psicólogos, disminuir la victimización secundaria por la repetición reiterada de los hechos que actualmente deben hacer las víctimas en varias instancias del sistema procesal penal, todo lo cual implica una necesaria coordinación con otras instituciones como las Policías, Servicio Médico Legal y Hospitales.

Lo anterior, junto a elementos del ámbito jurídico, podrá contribuir a disminuir los tiempos de tramitación judicial, aumentar la resolución efectiva de casos y mejorar sustancialmente la atención de las víctimas de delitos sexuales.

La quinta línea de acción en el marco del Proyecto OPA está dirigida a la intervención que realiza la Fiscalía de Coquimbo orientada a facilitar a los testigos que los fiscales requieran en Juicio Oral, su acceso y presencia en esta última etapa del proceso penal.

Las actividades se desarrollan por un equipo de trabajo especialmente conformado, y consisten en la ubicación de los testigos que son requeridos por las Fiscalías Locales para que participen en los juicios orales, la detección de las necesidades que presentan para su intervención y la identificación de requerimientos de protección que se deban implementar para facilitar su declaración en las audiencias.

Dentro de estos requerimientos se comprenden gastos por alojamientos, alimentación y traslados al Tribunal Oral, caracterizaciones, instalación de circuitos cerrados de televisión, videoconferencias, acompañamiento a la audiencia de juicio oral e indemnización lucro cesante, entre otras.

Durante el año 2010, en esta área se ha atendido a más de 2.700 testigos, asegurando su comparecencia en las audiencias de juicio oral.

Complementariamente y, como parte de nuestra permanente preocupación por potenciar la atención de víctimas y testigos, hemos mejorado la calidad reforzando la atención que se realiza a través de nuestro contact center y por medio de la implementación de fono-contactos en las fiscalías locales de mayor tamaño, esto es, La Serena, Coquimbo y Ovalle, con la lógica de descongestionar nuestras salas de atención y que nuestros usuarios sean atendidos de la mejor forma posible y facilitando su acceso a información relevante.

Cabe recordar que la Fiscalía de Chile cuenta desde el año 2009 con un call center a nivel nacional, la línea telefónica 600 333 0000, en la cual durante el 2010 se recibieron 3.372 consultas de usuarios relacionados con causas investigadas por nuestras fiscalías locales.

Para dar cobertura financiera a las necesidades derivadas de la protección, indemnización y atención que brindamos a nuestros usuarios, la Fiscalía Regional de Coquimbo cuenta con un Fondo para la atención de Víctimas y Testigos. En el periodo, este fondo contó con un presupuesto ascendente aproximado a los \$55.100.000, los cuales fueron ejecutados en un 100%. Un porcentaje importante de este fondo está destinado a los rubros de traslado, indemnización de lucro cesante por asistencia a Juicios Orales, alimentación y hospedaje de testigos.

A fin de medir los resultados en la atención a víctimas y testigos, uno de los principales indicadores de gestión que el modelo de intervención OPA contempla, corresponde al nivel satisfacción manifestada por las víctimas y testigos que fueron atendidos en el contexto de una declaración presencial, que es medida a través de una encuesta aplicada por una empresa externa a nivel nacional. Para este caso, la satisfacción se define como el porcentaje de usuarios consultados que califican con nota 5, 6 o 7 a la atención y al servicio recibido por parte de la Fiscalía durante su participación. A nivel regional, la satisfacción con la atención y el servicio recibido supera el 70%, dando cuenta de la alta aprobación que nuestras fiscalías locales en la región reciben de parte de sus usuarios.

El segundo rol que corresponde a la Fiscalía Regional de Coquimbo en el marco del Proyecto OPA, consiste en su labor de asesor de los operadores locales para la entrega óptima de nuestros servicios, especialmente desde las especialidades psicosociales, para tender a la mejora continua de la atención brindada.

En este contexto, en el año 2010 se elaboró regionalmente con participación de los operadores del sistema, un protocolo de entrevista presencial con el fin de estandarizar la atención de nuestros usuarios. Este protocolo contempla todas las actividades que deben ejecutarse para dar satisfacción a las necesidades de las víctimas y testigos que concurren a declarar a la Fiscalía. Asimismo se nombraron monitores provinciales de las fiscalías locales para hacer un seguimiento continuo al cumplimiento de las tareas que involucra una atención de excelencia a nuestros usuarios.

Por otra parte, la Fiscalía Regional de Coquimbo está encargada de coordinar los peritajes psicológicos y psiquiátricos privados, especialmente aquellos relacionados con la veracidad de relato y daño emocional de las víctimas, que son solicitados por los fiscales adjuntos como diligencias para apoyar las investigaciones penales. Durante el año 2010 se contrataron 156 peritajes privados y ratificaciones de peritos en Juicios Orales, que significaron un gasto de \$15.366.000. Como parte de esta labor de asesoría en el área de peritajes, se apoya directamente a los fiscales adjuntos en la interpretación y análisis de las pericias psicológicas, psiquiátricas y sociales, se sugieren formas de término adecuada considerando la situación e intereses de las víctimas y tiempos adecuados para la realización de diligencias de investigación, de manera de obtener los mejores resultados con las menores perturbaciones y victimización secundaria para los usuarios.

En el mismo marco del Lineamiento Estratégico de potenciamiento de la atención y protección a víctimas y testigos, se encuentra uno de los proyectos estratégicos más relevantes de la institución: un nuevo modelo integral de atención a usuarios víctimas y testigos, el cual forma parte de los Compromisos de Gestión Institucional, y que se ha denominado Sistema Integral de Atención a Usuarios, SIAU.

Este proyecto tiene como objetivo contar con un Sistema de Atención Integral que permita entregar un servicio de calidad orientado a los usuarios de la Fiscalía de Chile, que contemple modelos de atención según segmentos de usuarios con sus respectivos estándares y procesos de trabajo; plataformas de atención y sistemas de información y mecanismos de evaluación de procesos y de resultados.

Durante el año 2010, nuestra Región participó activamente en una comisión nacional especialmente conformada para avanzar en su diseño, el cual se espera tener terminado durante el presente año y comenzar su implementación gradual a nivel nacional, que comprende los espacios de atención relacionados con la primera línea de atención de las fiscalías locales, los usuarios del call center nacional, los procesos relacionados con reclamos, sugerencias y felicitaciones, y para las solicitudes que puedan presentarse fundadas en la Ley de Transparencia.

En razón a todos estos esfuerzos que la región realiza para mejorar la atención a nuestros usuarios, cabe destacar otros tres indicadores que demuestran el alto grado de la efectividad lograda: en la atención presencial, un 90,3% de nuestros usuarios, víctimas, testigos o abogados, son atendidos en nuestras fiscalías locales con tiempos de espera que no superan en promedio los 20 minutos, lo cual constituye un alto estándar para cualquier institución pública o privada. En la información que debemos entregar a nuestros usuarios, la región mantiene altos resultados en los indicadores relacionados con la percepción de las víctimas en relación con la comunicación de archivos provisionales y lo mismo ocurre con la comunicación de las sentencias definitivas que se dictan al término de una investigación. En estos dos indicadores, nuevamente alcanzamos un alto porcentaje de 83,1% y un 68% de cumplimiento, respectivamente, dando cuenta de la eficiencia alcanzada con los procesos implementados regionalmente para atención e información a nuestros usuarios.

Tercer Lineamiento Estratégico: El Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional.

Según nuestra misión, corresponde a la Fiscalía de Chile dirigir en forma exclusiva la investigación criminal y dar protección a víctimas y testigos. Conforme a ello, se requiere una permanente y directa coordinación con las Policías y con los otros Organismos Auxiliares, que permita contar con elementos para cumplir esta misión y lograrlo con altos estándares de calidad. Como señala el Plan Estratégico, potenciar una relación fluida y coordinada con estas Instituciones resulta fundamental para ejercer una gestión adecuada y obtener los resultados más óptimos posibles.

En este contexto, durante el año 2010 se mantuvieron las reuniones de coordinación con la I. Corte de Apelaciones de La Serena, con los Juzgados de Garantía y los Juzgados Orales de la Región, lográndose importantes acuerdos para agilizar la tramitación de las investigaciones, el mejoramiento de los elementos instalados en los tribunales para facilitar la realización de audiencias y el acceso de los intervinientes, todo como parte de la necesaria colaboración que debe existir para mantener en buena marcha el sistema procesal penal.

En el ámbito investigativo, durante el año 2010, la Fiscalía Regional de Coquimbo potenció la labor de análisis delictual que realiza un equipo de trabajo especialmente conformado con funcionarios de la Fiscalía Regional de Coquimbo con integrantes de la Oficina de Análisis Delictual de la Policía de Investigaciones de Chile en esta región.

La labor que realiza este equipo está destinada tanto para las labores de prevención que realiza la PDI por medio de sus Planes Antidelincuencia Selectivos (PLAS), como para la actividad investigativa de delitos propiamente tal, para lo cual se cuenta con herramientas informáticas y técnicas de análisis que permiten evaluar y entregar a fiscales y unidades policiales, antecedentes para la investigación de delitos que inicialmente contaban con imputados desconocidos pero que, gracias a este apoyo metodológico y tecnológico, pueden resolverse positivamente. Entre otros, se ha aplicado a casos de delitos sexuales, drogas, hurtos, robos en lugar habitado y robos con violencia e intimidación, en los cuales se identifican patrones delictuales y analizan delitos similares en un área geográfica definida tan pronto como sea posible para trabajar mancomunadamente entre fiscalía y PDI en el desarrollo de las mejores estrategias para abordar este tipo de fenómenos delictuales y maximizar la cantidad de casos resueltos.

Asimismo, este equipo realiza una importante labor para abordar las órdenes de detención dictadas por los Juzgados de la región que se encontraren pendientes.

Enmarcado en el mismo lineamiento de coordinación interinstitucional, durante el año 2010 se concretó la interconexión del 100% de las Unidades de Carabineros de la Región de Coquimbo con nuestras Fiscalías Locales para el traspaso electrónico de partes de denuncias, optimizando de esta forma esta función que permite lograr importantes ahorro en tiempo en la digitación de los partes y el pronto inicio de las actividades de investigación.

Por otra parte, dentro de la coordinación interinstitucional, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha mantenido un contacto permanente con instituciones públicas y privadas con el objeto de facilitar el acceso que ofrece la red asistencial para la reparación de las víctimas y testigos atendidos por nuestras Fiscalías Locales.

Es así como, durante el año 2010 se realizaron coordinaciones constantes y permanentes con SERNAM y sus instituciones colaboradoras, tales como SAYEN, RAYUN, LIWEN y MACALLAY.

En los casos de Violencia Intrafamiliar que afectan a mujeres, se trabaja directamente con instituciones de la red, especialmente con SERNAM, que brinda, a través de su casa de acogida, atención integral a las víctimas de riesgo alto y a sus hijos menores de edad. Durante el año 2010 se realizaron visitas conjuntas con el SERNAM a todas las Fiscalías Locales de la región para dar a conocer a nuestros funcionarios, los servicios que ofrece la Casa de Acogida, de tal forma de potenciar su aplicación a casos que ameriten el traslado de las víctimas.

En esta misma línea, el mes de noviembre del 2010, profesionales de la Fiscalía Regional de Coquimbo visitaron todas las Unidades de Carabineros de Chile de las comunas de La Serena y Coquimbo a fin de acordar procedimientos destinados a mejorar el contacto con las víctimas de delitos de violencia intrafamiliar. Para este efecto, la fiscalía diseñó un formato de "Autoreporte", el que debe ser llenado por los propios usuarios al momento de la denuncia con sus principales datos personales, con el objetivo de contactarlos y evaluar a un mayor número de víctimas de estos delitos dentro de las 24 horas de ingresada una denuncia a la Fiscalía.

Por otra parte, la Fiscalía Regional de Coquimbo participó activamente en el periodo en la Mesa Regional de Atención a Víctimas y en la Mesa Técnica Regional Intersectorial de Prevención VIF.

La misma importancia ha representado durante el año 2010 las coordinaciones realizadas con SENAME y sus instituciones colaboradoras, el Centro Halar, CENIM, Centro Reparar, OPD de La Serena y de Coquimbo, y la relación permanente que la Fiscalía Regional de Coquimbo mantiene con el Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos de Coquimbo (CAVI) y los Centros de Atención a Víctimas de Delitos del Ministerio del Interior de Coquimbo y Ovalle.

En el ámbito de la coordinación institucional requerida para la correcta aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, durante el año 2010 la Fiscalía Regional de Coquimbo participó, en calidad de invitado, en la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de esta Ley, la cual está encargada de visitar este tipo de centros, a fin de asesorar en el debido respeto de los derechos de los adolescentes y de sus condiciones de vida al interior de los mismos, realizando las recomendaciones necesarias a las autoridades e instituciones públicas y privadas correspondientes.

También en el ámbito de esta Ley, durante el año 2010, la Fiscalía Regional de Coquimbo participó en el Consejo Regional Interinstitucional de Responsabilidad Adolescente, que tiene como misión la coordinación efectiva del Sistema Judicial Juvenil y la solución de nudos críticos que se detecten, no restringiéndose sólo a los centros privativos de libertad, sino que considerando también las sanciones y medidas ejecutadas en el medio libre.

En otro ámbito de acción, cabe destacar la suscripción en el mes de Octubre pasado del Convenio de Mediación con la Corporación de Asistencia Judicial, el cual tiene por objeto someter a mediación determinados hechos a fin de buscar una solución que no represente una condena y que signifique una solución de fondo que, muchas veces, la vía penal no entrega, manteniendo actualmente una cobertura para las comunas de La Serena, Coquimbo y Vicuña. En esta mediación se comprenden delitos de baja penalidad en los cuales, además, sea posible una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio; de esta forma, este procedimiento está principalmente dirigido a delitos de amenazas, riñas, lesiones leves, hurtos entre personas relacionadas, cuasidelitos de lesiones, y otros que tengan también una baja entidad. Se incluyó entre las hipótesis de aplicación, la posibilidad de derivar a esta mediación hechos que no fueran delito pero que muchas veces son denunciados ante las Policías o ante la Fiscalía; así por ejemplo, se aplica para conflictos vecinales o escolares donde no hay lesiones y otros hechos similares.

Por último, como parte de la necesaria coordinación interinstitucional, fiscales y funcionarios han intervenido como relatores en diversas capacitaciones en instituciones públicas y privadas, en materias tan amplias como violencia intrafamiliar, medidas de protección, proyecto OPA, delitos sexuales, Grooming, Bullying y responsabilidad por accidentes mineros, en toda la región, comprendiendo entre otros, unidades policiales, centros de salud, colegios, universidades, empresas, juntas de vecinos, todo por la importancia que tiene el acercamiento a la comunidad y la información que debe tener en relación a los servicios que brinda nuestra Institución.

Cuarto Lineamiento Estratégico: El desarrollo de una persecución penal pública y política criminal eficientes.

Es deber de la Fiscalía de Chile promover una persecución penal eficiente respecto de todos los delitos que son de su competencia, debiendo incorporar altos estándares de calidad, con particular énfasis en los de mayor connotación social, así como una utilización racional de las salidas alternativas. De esta forma, la institución debe orientar el quehacer institucional con el objeto de optimizar los recursos que se asignan a las investigaciones penales, manteniendo el apoyo permanente a las víctimas más vulnerables.

Una de las principales actividades enmarcadas en este lineamiento que se abordaron durante el periodo, estuvo conformada por la participación en el diseño de criterios de actuación comunes en la persecución penal de los principales delitos. Lo anterior nació a partir de la necesidad de establecer una política nacional sobre criterios de actuación en la persecución penal en las familias de delitos de robos, drogas, sexuales, económicos, cometidos por funcionarios públicos, violencia intrafamiliar y parricidios, con mención tanto a aspectos sustantivos o de fondo, como a aquellos procesales e investigativos que fueran conducentes a mejorar la calidad de la persecución penal.

En base al establecimiento de criterios de persecución penal uniformes, al mejoramiento continuo de los procesos de trabajo que permite mantenernos como una institución sólida en el ámbito de la investigación y de litigación de causas penales, al establecimiento de sistemas de atención adecuados que permiten facilitar y asegurar el acceso al sistema judicial a víctimas, testigos y a la comunidad en general, y a la labor de coordinación interinstitucional, especialmente en lo relativo al análisis delictual, durante el año 2010 se lograron importantes resultados en el ámbito de la persecución penal y en la disminución de las tasas de criminalidad.

En efecto, en el año 2010, ingresaron un total de 43.826 casos, lo que representa una disminución de un 4,2% respecto de los ingresos del año 2009 o, lo que es lo mismo, casi 2.000 denuncias menos.

Del total de ingresos, los delitos más violentos, como son los homicidios, los delitos sexuales, infracciones a la ley de drogas y los robos con violencia o intimidación, no alcanzan en esta región a representar el 10% de las denuncias, lo cual refleja que se mantiene una criminalidad de baja intensidad.

Dentro de los delitos que tuvieron una baja más significativa, destacan claramente la disminución de los robos en lugar habitado, que presentaron una disminución del 8%. Las lesiones leves y los delitos de daños también disminuyeron un 8% cada uno. Asimismo, los delitos de robos en bienes nacionales de uso público alcanzaron una disminución de un 3% respecto del año 2009.

La relevancia que tiene la disminución en estos delitos está centrada en que se trata de aquellos típicamente considerados de connotación social porque afectan a bienes jurídicos a los cuales la comunidad da gran importancia.

Los resultados de esta disminución en los delitos se vieron también reflejados en la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas con el mes de Junio de 2010. En base a esta encuesta, se puede concluir que, en la Región de Coquimbo, el porcentaje de estos hogares victimizados disminuyó en la última medición y se encuentra a nivel nacional como una de las regiones con menor nivel, muy por debajo de la media nacional.

Otro de los delitos de especial interés para la comunidad en general y la fiscalía en particular, son aquellos referidos, a las infracciones a la Ley de Drogas; en el periodo, se incautaron aproximadamente 702 kilos de marihuana elaborada, pasta base y clorhidrato de cocaína y casi 3.000 plantas de marihuana, en 783 investigaciones por este tipo de delitos.

Dentro de los resultados obtenidos en el periodo, uno de los más destacados corresponde al explosivo aumento de la cantidad de Juicios Orales celebrados, los que alcanzaron la suma de 1.056, un 150% más que los realizados en el año 2009, cifra que se explica, entre otras razones, por las adecuaciones que debieron realizar los Tribunales Orales de la Región para poder cubrir la importante cantidad de juicios que se encontraban pendientes, situación que entendemos debiera comenzar a normalizarse durante el presente año y que, por cierto, obligó a esta Fiscalía Regional de Coquimbo a destinar una importante cantidad de recursos para poder lograr su realización.

Adicionalmente, más de 9.300 imputados fueron sometidos a control de detención; se realizaron casi 3.800 formalizaciones por crímenes y simples delitos, se presentaron más de 1.900 acusaciones, se generaron aproximadamente 9.400 requerimientos simplificados y monitorios por faltas y simples delitos, y se decretaron más de 600 prisiones preventivas.

Por otra parte, se mantuvo un alto porcentaje de términos de causas, que alcanzó un 101,4%, considerando el stock de casos ingresados, independiente del año de ingreso.

Dentro de estos términos, nuevamente se registró un alza en la cantidad de causas judicializadas, que significó, al igual que durante el 2009, la mayor judicialización desde el inicio de la Reforma Procesal Penal en esta región, alcanzando un 42,9%, lo que muestra otra faceta de la mejora continua de los resultados en la persecución penal.

Como contrapartida del constante aumento de la judicialización, lógicamente se presenta una tendencia permanente a la baja de los archivos provisionales, alcanzando solo un 45%, lo que representan más de 1.500 archivos provisionales menos que en el año 2009.

En los distintos delitos que son de competencia de la Fiscalía Regional de Coquimbo, durante el año 2010 se logró una cantidad de 9.106 relaciones terminadas por sentencias condenatorias. Considerando agregadamente los diferentes procedimientos judiciales de término, las sentencias condenatorias representan un 96% sobre el total de sentencias definitivas dictadas en el periodo.

Mención especial requieren los delitos de violencia intrafamiliar, que se encuentran dentro de los delitos prioritarios definidos en el Plan Estratégico institucional. Uno de los principales resultados del proyecto OPA en estos delitos está relacionado con que durante el año 2010, se registraron más de 670 relaciones terminadas por sentencia definitiva condenatoria, lo que representa un fuerte aumento del 70% respecto del año 2009. A nivel agregado, los términos judiciales en esta categoría de delitos alcanzaron las 3.535 relaciones, lo que representa un aumento de casi un 30% respecto del periodo anterior.

Por último, en el ámbito de la persecución penal, corresponde hacer mención a algunas investigaciones por delitos de connotación pública regional, que han obtenido favorablemente una sentencia condenatoria:

1) En el mes de Abril de 2010, se condenó al imputado conocido como “El Violador de Las Compañías” a la pena de presidio perpetuo calificado como autor de varios delitos sexuales y un delito de robo con intimidación.

2) En la investigación conocida como el “Caso de los hermanos Chepillo”, en La Serena, se condenó en el mes de febrero, a tres imputados, a uno de ellos a la pena de presidio perpetuo simple como autor de un delito de robo con homicidio, a otro a la pena de quince años de presidio en calidad de autor de un delito consumado de homicidio simple y a una pena de cinco años de presidio como autor de un delito frustrado de homicidio simple y, al tercero, menor de edad, a la pena de 5 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social como autor de un delito de homicidio frustrado.

3) En el caso conocido como de “la Banda de los Cyber café” de La Serena, en el mes de Octubre, se logró la condena a cinco imputados. Cuatro de ellos fueron condenados como coautores de un delito de robo con intimidación, a dos de ellos a la pena de 10 años y 1 día de presidio y a los otros dos a la pena de 15 años y 1 día de presidio. Pero, además, resultó relevante que a una quinta imputada se la condenara por el delito de receptación de las especies robadas.

4) En el mes de febrero de 2010, la Fiscalía logró se condenara a un imputado por once delitos de apropiación indebida a la pena de 6 años de presidio y a una alta multa, fallo que resulta importante porque las sanciones contempladas para los delitos económicos son, en general, bajas, pero en este caso atendido el monto de la pena impuesta, el imputado deberá cumplir la condena de presidio de manera efectiva.

5) La Fiscalía logró en el mes de Diciembre una condena a un imputado de Coquimbo por varios delitos sexuales en contra de dos bisnietas de su conviviente, a una pena total superior a 16 años de presidio.

6) En otra investigación, en el mes de Agosto, la Fiscalía obtuvo en Ovalle una condena para un imputado a una alta pena de 10 años y 1 día de presidio por un delito de robo con violencia, siendo relevante porque con este fallo comenzó la desarticulación de una peligrosa banda delictual en Sotaquí.

7) La Fiscalía logró condenar en el mes de enero de 2010, a un profesor de Combarbalá por varios delitos sexuales reiterados, a dos penas de 13 años y de 8 años de presidio; además, por un delito de producción de material pornográfico infantil cometidos en contra de sus alumnas de 11 y 12 años de edad, se lo condenó a otra pena de 3 años de presidio.

8) En una investigación en Coquimbo, en el mes de septiembre se logró la condena a cuatro imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas, investigación en la que se incautó 4.818 gramos de pasta base de cocaína, imponiéndose a uno de los imputados la pena de 7 años de presidio, a otros dos imputados la pena de 5 años de presidio y a una imputada adolescente la pena de 3 años de Libertad Asistida Especial.

9) En el mes de abril de 2010, la Fiscalía logró una condena a tres imputados de Andacollo como autores de homicidio calificado a la pena de 7 años de presidio. Esta causa es relevante ya que se trata del primer delito de homicidio calificado cometido en esa comuna desde la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

10) En el mes de Mayo, se condenó en una investigación realizada en la comuna de Coquimbo, a dos auxiliares paramédicos del Hospital de esa comuna por un cuasidelito de homicidio por su responsabilidad en el fallecimiento de un lactante de 6 meses, sentencia que reviste especial relevancia dada la dificultad que reviste acreditar las negligencias en el ámbito de la salud.

Todos estos ejemplos dan cuenta de una permanente mejora en la gestión jurídica regional que, sin duda, repercute a nivel agregado a nivel país, dado que suma esfuerzos y experiencias que permiten institucionalizar la gestión de la Fiscalía de Chile.

Sin perjuicio de estos buenos ejemplos regionales, es necesario proyectar un modelo que permita seguir desarrollando una persecución penal más eficaz y eficiente, en el entendido que esto solo ocurrirá en la medida que extendamos nuestras redes con las policías, fortalezca el traspaso de la información, mejoremos la calidad y oportunidad en las operaciones y coordinemos de mejor manera nuestro actuar.

En esta línea, les explicitamos que esta Fiscalía Regional de Coquimbo está planificando para este año, un trabajo sistemático y sustentable en el tiempo, que permita la estructuración de equipos especializados de Fiscales que sean capaces de analizar, diagnosticar e implementar acciones dirigidas a investigaciones de carácter estratégico, por cierto, sin dejar de lado aquellas que son de orden masivo y que pueden ser abordadas con procesos tecnológicos inteligentes y de alto alcance.

Para lograr este ambicioso proyecto, aprovecharemos la experiencia, la capacidad técnica y la especialización de los Fiscales y las policías, de manera de promover un trabajo consistente y perdurable, no solo con las políticas institucionales, sino con las exigencias propias del sistema, de las personas y de la Comunidad de la IV región.

CONSIDERACIONES GENERALES.

La Fiscalía Regional de Coquimbo asume y mantiene dentro de sus principios una sólida responsabilidad social, entendiendo que la sociedad demanda, cada vez más, que la institución realice importantes aportes a la comunidad, por lo que nuestras acciones deben ser expresión de nuestro compromiso de operar de una forma que exceda las expectativas generales que la sociedad tiene en relación a la institución, con una plena integración con los distintos grupos de interés con que interactuamos. Asumimos plenamente la responsabilidad de nuestra organización respecto del impacto de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente, procurando mantener un comportamiento transparente y ético, consistente con el desarrollo sustentable, el bienestar general de la sociedad y simultáneamente la calidad de vida de las personas, con pleno cumplimiento de la legislación vigente.

En este sentido, durante el año 2010, la Fiscalía Regional de Coquimbo comenzó a aplicar un proceso de reciclaje de residuos de papeles y cartones en todas nuestras fiscalías locales, que permite disminuir considerablemente la cantidad de estos desechos, con una evidente ganancia ecológica y para el medio ambiente de toda la comunidad.

En este mismo ámbito, especial preocupación reviste para esta Fiscalía Regional de Coquimbo la obligación de cumplir con la normativa legal y reglamentaria relativa a la seguridad de fiscales, funcionarios y de los usuarios que concurren a nuestras dependencias institucionales. Es por esto que, consciente de la importancia que tiene la Prevención de los Riesgos del Trabajo en los procesos que desarrolla, y teniendo presente la responsabilidad que debe asumir legalmente frente a los

sinistros laborales, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha determinado definir un Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo con la asesoría y colaboración de la Asociación Chilena de Seguridad, entidad que ha comprometido el aporte de asesoría técnica calificada y oportuna para el desarrollo conjunto de este programa denominado Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, GPS-ACHS. Con esto, ponemos de manifiesto nuestra firme convicción en cuanto a considerar la protección de las personas como un valor intransable de nuestra cultura organizacional.

Como se señaló, la integración con la comunidad va más allá del cumplimiento de su misión, razón por la cual, permanentemente se realizan acciones de apoyo social, especialmente en aquellas fechas que revisten mayor significado y trascendencia. Así por ejemplo, funcionarios y fiscales de la Fiscalía de Coquimbo organizaron una actividad recreativa para los alumnos de la escuela especial Nueva Esperanza de esa comuna, cuyo objetivo fue entregar un momento de alegría a niños de escasos recursos y con problemas físicos y mentales.

Otro ejemplo similar lo constituyó la Fiscalía Local de Andacollo que para Navidad visitó dos jardines infantiles de esa comuna que atienden a 40 niños de escasos recursos, y la colaboración que la Fiscalía Local de La Serena brinda al Hogar Redes, también de menores de edad de escasos recursos.

Por último, atendida la trágica situación que vivió el país en el mes de febrero pasado a raíz del terremoto en la zona centro sur, desde ese mismo momento nuestros fiscales y funcionarios estuvieron plenamente dispuestos a asumir las funciones que fueren necesarias para apoyar a las zonas afectadas, con las cuales no solo se cooperó materialmente con alimentos de primera necesidad, si no que dos de nuestros fiscales fueron

comisionados durante un mes a las fiscalías de Locales de Concepción y de Talcahuano para apoyar sus funciones en los momentos más críticos.

En otra materia, en esta Cuenta Pública y, al igual que en la realizada en el periodo anterior, corresponde hacer una especial mención a lo indispensable que el proyecto de fortalecimiento de la Fiscalía de Chile 2009-2012 pueda materializarse en una ley que aumente la dotación de personal y fiscales adjuntos para abordar adecuadamente las siempre crecientes y sostenidas cargas de trabajo.

En efecto, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, el ingreso de denuncias ha sufrido un aumento del 60%, las formalizaciones crecieron un 385%, las causas terminadas aumentaron un 189%, dentro de las cuales destaca el aumento en la cantidad de relaciones terminadas por sentencias definitivas condenatorias que aumentaron un 328%.

La institución ha mejorado permanentemente sus resultados pero, por otro lado, ha debido asumir permanentemente otros nuevos desafíos, como la reciente publicación en el mes de Diciembre pasado de la Ley N°20.477 que modificó la competencia de los Tribunales Militares, traspasando la investigación de delitos de competencia de esa Justicia a la Fiscalía de Chile.

En el mismo sentido, debemos considerar la necesidad de contar con una Fiscalía de Casos de Alta Complejidad, entre los cuales se encuentran los delitos de corrupción y lavado de dinero, o los requerimientos impuestos con la dictación de la Ley N 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo cual revela la necesidad de profundizar la utilización de nuevas herramientas de investigación patrimonial y detección de activos procedentes de los delitos de corrupción.

Ante esto, el Proyecto de Fortalecimiento Institucional aparece como imprescindible ante estos ingentes desafíos de la sociedad actual y para lo cual la Fiscalía de Chile debe estar preparada con los recursos humanos y materiales suficientes y necesarios para abordarlos adecuadamente, por lo que abogamos por la pronta concreción de este proyecto.

Agradecimientos:

Muchas gracias y buenas tardes.